

Por un control estricto de las armas

Voces de Haití



Resumen

“Cuando hay armas de por medio, hay más víctimas. Antes eran los *macoutes* (paramilitares liderados por los ex dictadores Francois y Jean-Claude Duvalier) y los ex soldados los que tenían armas. Ahora, es la gente que vive en tu propio barrio la que comete actos de violencia”.

— Malya, una mujer de Martissant, un suburbio de Puerto Príncipe, noviembre de 2005

La violencia armada continúa haciendo estragos en la vida de muchas personas en Puerto Príncipe, capital de Haití, a pesar de la presencia de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).¹ Grupos armados de las zonas pobres de la ciudad (algunos de ellos leales al ex presidente Aristide y otros leales a facciones políticas rivales) y bandas criminales, luchan contra la Policía Nacional (PN) haitiana y contra las fuerzas de Naciones Unidas, y se enfrentan entre ellas.

Sólo en un centro médico de Puerto Príncipe, unas 1.400 personas fueron ingresadas por herida de bala entre diciembre de 2004 y octubre de 2005. “Siguen llegando tres víctimas por arma de fuego cada día, y hay otras muchas víctimas que van al Hospital General Universitario, o que son asesinadas”, explica el jefe del Centro médico, Ali Besnaci, de Médicos Sin Fronteras. “Esto es como una guerra. Los enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, la MINUSTAH, son constantes”, añade. Muchas de las víctimas, si no la mayoría, han sido civiles inocentes.

Las organizaciones de derechos humanos han documentado asesinatos y secuestros cometidos por muchos de esos grupos armados; ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional haitiana; y muertes causadas supuestamente por disparos indiscriminados por parte de soldados de NNUU.² También se cree que el número de violaciones que tienen lugar en Puerto Príncipe está directamente vinculado a la proliferación de armas.

La campaña *Armas bajo Control* realizó varias entrevistas en Haití en noviembre de 2005. En este documento se reproducen las voces de algunas de las personas que pagan por el fracaso continuado de la comunidad internacional por controlar el comercio de armas.

La violencia armada en Haití no es algo nuevo. Después de años de dictadura de la familia Duvalier, en 1990 Jean-Bertrand Aristide se convirtió en el primer presidente de Haití elegido democráticamente. A los pocos meses, huyó a Estados Unidos tras ser derrocado por un sangriento golpe de estado. Durante la dictadura militar que siguió al golpe de estado y que duró hasta 1994, fueron asesinadas unas 3.000 personas. Tras ser restituido en el poder en una operación militar

estadounidense, Aristide fue acusado de apoyar a bandas armadas de las zonas pobres para sus propios fines políticos. En febrero de 2004, Aristide se vio forzado a abandonar Haití en medio de una revuelta armada protagonizada por bandas que antes le apoyaban, y por soldados desmovilizados.

El gobierno provisional, que continúa a día de hoy en el poder, carece de una voluntad política clara para poner en marcha un programa exhaustivo de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) dirigido a todas las comunidades, individuos y grupos armados ilegales. Mientras tanto, la proliferación de armas pequeñas sigue costando la vida a muchos hombres, mujeres y niños inocentes. El desarrollo del país también se ve entorpecido por la violencia que generan la presencia y la proliferación de las armas.

Fuera de Puerto Príncipe, Haití ha vivido una paz relativa desde la primavera de 2005, año en el que las fuerzas de Naciones Unidas eliminaron las bases de los ex militares armados que habían controlado algunas de las ciudades más importantes del país, así como extensas áreas del interior. El personal militar de Naciones Unidas también ha logrado establecer una presencia permanente en algunas áreas pobres de Puerto Príncipe, lo que ha aportado un cierto grado de tranquilidad. Pero más allá de esta situación, la ley de las armas sigue dominando la capital y no sólo provoca muertes y heridos entre las personas más pobres, sino que también destroza sus vidas. La violencia de los grupos armados continúa, mientras aumenta la profunda preocupación en relación a los casos de homicidios ilegítimos cometidos por la Policía Nacional haitiana.

Haití no produce armas de fuego, a excepción de las rudimentarias armas caseras *creole* (criollas), que normalmente son pistolas bastante toscas o rifles hechos a partir de otros viejos. La mayor parte de las armas son introducidas ilegalmente en Haití desde países vecinos, incluido EEUU. En la última década, varios países, entre ellos Brasil, Francia, Italia, el Reino Unido y EEUU, han emitido licencias para la transferencia de armas a Haití, según los datos de aduanas recogidos en la base de datos de comercio de mercancías de Naciones Unidas.

Desde 1980, EEUU ha sido el mayor proveedor de armas de Haití. Sin embargo, después del golpe de estado militar de 1991, el gobierno de EEUU impuso un embargo de armas a Haití que permitía hacer algunas excepciones para la autorización de transferencias de algunas armas estadounidenses tras analizar "caso por caso". Desde el nombramiento en 2004 de Gerard Latortue como primer ministro, se han producido algunas de esas transferencias que han incluido el suministro, en 2004, de 2.600 armas a la Policía Nacional, implicada en violaciones de los derechos humanos. En 2005, se aprobó una venta adicional de pistolas, rifles y gases lacrimógenos a la Policía Nacional por valor de 1,9 millones de dólares.³

El 8 de enero de 2006 debían celebrarse las primeras elecciones en Haití desde que el presidente Aristide fuera desalojado del poder en febrero de 2004. Ahora, éstas han sido pospuestas debido a la situación de constante inseguridad. Las frágiles condiciones de seguridad y la tensión política que se vive en Haití, hacen temer que las elecciones irán acompañadas de incidentes de violencia armada.

Los gobiernos de otros países deben actuar para detener el flujo de armas desde América Latina, EEUU y otras regiones. El resto del mundo debe asumir la responsabilidad de las armas que suministra. Todavía no existe un tratado internacional vinculante y exhaustivo que regule el comercio de armas convencionales, a pesar de que las transferencias internacionales de armas siguen alimentando el sufrimiento y la pobreza.

En enero de 2006, Naciones Unidas iniciará una ronda de debates sobre desarme. Habrá discusiones técnicas y negociaciones diplomáticas entre estados.

Un nuevo Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA), basado en los principios fundamentales del derecho internacional, establecería unos principios básicos comunes para las transferencias de armas. De esta forma se reduciría el coste humano vinculado a la transferencia irresponsable de armas y se evitaría que los comerciantes de armas sin escrúpulos se aprovecharan del punto más débil de la cadena de suministro.

El año 2006 ofrece una oportunidad política única para poner en marcha este Tratado:

- La Conferencia de Revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras, que se celebra en junio y julio de 2006, debe acordar unos principios claros para la transferencia internacional de estas armas, basados en las normas internacionales existentes, con el fin de evitar que éstas caigan en manos equivocadas.
- El Comité Preparatorio de la Conferencia, que se celebra este mes de enero en Nueva York, debe preparar la agenda y los debates sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
- El Primer Comité de la Asamblea General de NNUU, que se reúne en octubre de 2006, debe, por último, iniciar el proceso de negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La transferencia irresponsable de armas sigue contribuyendo a que se cometan atrocidades en Haití y en muchos otros países. Los exportadores de armas responsables y los Estados directamente afectados por el descontrol en el comercio de armas no deben ser refrenados por los pocos países que quieren entorpecer el avance de las negociaciones. En 2006, deben empezar las negociaciones para acordar un Tratado sobre el Comercio de Armas.

1 El verdadero impacto de la transferencia irresponsable de armas

“En la Nochebuena de 2004, las bandas me violaron. Los *chimères* (un término peyorativo para designar a miembros de bandas o criminales) vinieron a mi casa en medio de la noche. Iban enmascarados y llevaban armas grandes que dispararon frente a la puerta; después, cuatro de ellos irrumpieron en la casa donde yo dormía. Los dos niños que estaban conmigo lo vieron todo. Esa noche me golpearon. No recibí tratamiento médico hasta mucho tiempo después. Fue entonces cuando me enteré que tenía sífilis”

— Guerline, una mujer de 40 años, describe un ataque por bandas armadas el 24 de diciembre de 2004, en Cité Soleil, Puerto Príncipe

Se calcula que alrededor de 300.000 personas viven en Cité Soleil. Esta zona de Puerto Príncipe, ha atraído a trabajadores pobres procedentes de las zonas rurales sin otro sitio a donde ir y, en los últimos años, se ha convertido también en el refugio de bandas dedicadas a la violencia que actúan en otras partes de la capital.

Cité Soleil se ha visto devastada por la violencia continuada y fue escenario de la brutal batalla entre dos grupos armados rivales formados principalmente por jóvenes y adolescentes. Uno de los grupos armados era dirigido por un partidario de Aristide que usaba el alias de Dread Wilmè (supuestamente asesinado por las fuerzas de Naciones Unidas el 6 de julio de 2005); el otro lo dirigía Thomas Robinson, alias Labanyè. Esta violencia se cobró nuevas víctimas, como explica **Guerline**: “Mi marido murió durante la violenta batalla que estalló el 30 de septiembre de 2004. Las bandas le dispararon y quemaron su cuerpo. Teníamos una casa, pero la quemaron y se llevaron los ladrillos que quedaron”

En su mayoría, las víctimas han sido gente corriente que ha sido asesinada, violada, secuestrada y extorsionada. Desde la muerte de Labanyè, cuya banda controlaba el barrio de Boston, en Cité Soleil⁴ en la primavera de 2005, la violencia ha continuado, y grupos armados partidarios de Aristide se enfrentan casi a diario contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. El 15 de noviembre de 2005, las fuerzas de Naciones Unidas fueron atacadas por hombres fuertemente armados, contra los que libraron un tiroteo que duró ocho horas.⁵

La violencia armada limita casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Los colegios y el único hospital del barrio estuvieron cerrados durante varios meses, desde finales de 2004 a principios de 2005; y la actividad del mercado y el transporte público se detuvieron. Guerline es sólo una de las innumerables personas que han tenido que huir de Cité Soleil; ella ha vivido en carne propia cómo un incidente de violencia armada es capaz de destruir mucho

más que la vida de su marido. “Tenía un pequeño puesto donde vendía fruta. Lo que sacaba, me daba para alimentar a mis siete hijos y enviarlos a la escuela. Pero las bandas destruyeron toda la mercadería. No tenía forma de mantener a mis hijos”.

Desde 2004

A pesar de que los pobres de Puerto Príncipe son los más afectados por la creciente violencia, las familias adineradas y de clase media han sido blanco de una serie de secuestros, en su mayoría con el fin de cobrar rescate,⁶ cuyo promedio asciende a dos al día.⁷ Estos secuestros han tenido también como objetivos a civiles extranjeros, personal civil y militar de NNUU, y trabajadores humanitarios. “La primera vez que me secuestraron fue en marzo de 2004”, explica Justine, una mujer de 39 años que trabaja de administrativa en una escuela y que es madre de tres niños.

En el primer incidente, Justine fue secuestrada junto con sus hijos. “No podía hacer nada porque iban armados”. Uno de los secuestradores le dijo: “¿No sabes que ha llegado tu hora?”. Sin embargo, ella y su familia fueron puestos en libertad sin mediar explicación.

El segundo incidente tuvo lugar en febrero de 2005 y fue, posiblemente, aún peor: un ejemplo de los secuestros de niños.⁸ En esta ocasión, el objetivo fue su hijo de 10 años. “Fui a recoger a mi hijo, Patrick, al colegio. Después de meterlo en el coche, noté la presencia de alguien junto a mí. Un hombre sacó una pistola y me apuntó. No me querían a mí, querían a mi hijo. Me obligaron a salir del coche. Mientras se alejaban, podía ver como Patrick lloraba y gritaba, -¡Mamá!, ¡mamá!-. Es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Llamaron a mi marido y le dijeron que habían secuestrado a su hijo.

“Primero nos pidieron un millón de dólares. Después, 200.000 dólares. Mi marido negoció con ellos; no sé cuánto pagó finalmente. Nuestros amigos nos ayudaron a pagar el rescate y Patrick fue puesto en libertad al día siguiente”.

“Ahora, Patrick tiene problemas en el colegio. Tengo que llevarle a un psicólogo. Antes padecía una anemia leve, pero ahora ha empeorado. Después del secuestro, Patrick sufría ataques de pánico y pesadillas y se quejaba de dolor de estómago y de dolores de cabeza. Había empezado a mejorar, pero un niño de su clase fue secuestrado recientemente y le tuve que llevar al psicólogo de nuevo”.

“Después del secuestro de Patrick, caí en una depresión y ahora tomo antidepresivos. Estoy yendo a un psicólogo y cada sesión me cuesta 24 dólares. No me lo puedo permitir. No tengo ganas de vivir. Cuando estamos en la zona en la que nos secuestraron, los niños

siempre se acuerdan de lo que pasó. Yo vivo siempre con el miedo de que nos vuelvan a secuestrar. Vivo atemorizada y desconfío de todo el mundo. A veces no lo puedo soportar”.

Hasta 2004, el barrio de Bel Air en Puerto Príncipe no era considerado una zona particularmente violenta. Sin embargo, situado a sólo tres manzanas del Palacio Nacional en Puerto Príncipe, tras la partida del entonces Presidente Aristide se convirtió en un hervidero de enfrentamientos armados. La administración del Primer Ministro Latortue destituyó a muchos funcionarios de Estado partidarios de Aristide, les acusó de crímenes y ordenó a la policía que les arrestara. Los funcionarios se resistieron y pidieron que se les restituyera sus puestos de trabajo; y también exigieron la vuelta de Aristide. Durante el estallido de violencia que siguió a este hecho, grupos de derechos humanos han acusado tanto a la Policía Nacional, como a los grupos armados de cometer numerosos abusos contra civiles inocentes atrapados en el medio, por ejemplo, casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos por parte de la policía.⁹

Yvonne, de 29 años, es una de estas víctimas. Describió el ataque que tuvo lugar el 18 de agosto de 2005:

“Hacia las siete de la tarde, un grupo de delincuentes vino a mi casa. Eran cinco hombres y cuatro mujeres. Llevaban pañuelos de colores e iban armados. Tenían ametralladoras,... muchas armas. Los hombres no paraban de disparar e irrumpieron en la casa. Me golpearon y me violaron en mi casa”.

“Antes no había tanta violencia. Los delincuentes matan a la gente; la policía mata a la gente. No hay nadie que nos proteja cuando empiezan a pelear. Las mujeres son violadas constantemente”.



Oxfam

¿Quién utiliza las armas de fuego?

En la actualidad, el miedo a la policía y el miedo a las bandas es algo muy frecuente en Puerto Príncipe. El gobierno de Haití y el de EEUU señalan que la policía necesita las armas para enfrentarse a la gran

cantidad de grupos ilegales armados, que tienen en su poder y utilizan hasta 13.000 armas pequeñas y ligeras.

En octubre de 2005, un informe del Small Arms Survey, proyecto con sede en la Universidad de Ginebra, identificó “un mínimo de doce tipos distintos de grupos armados, que tienen en su poder un mayor o menor número de armas pequeñas y ligeras de diferentes calibres: algunas Organizaciones populares (OPs, organizaciones de base vinculadas a políticos), *baz armés* (bandas delictivas de barrio), *zenglendos* (bandas criminales aisladas), miembros desmovilizados de las ex Fuerzas Armadas de Haití (FADH), ex paramilitares (*Front Révolutionnaire pour l'Avancement et le Progrès d'Haiti* – FRAPH), la antigua Guardia Presidencial,¹⁰ presos fugados de las cárceles, grupos criminales organizados, grupos armados de autodefensa, compañías de seguridad privadas, civiles y políticos”. Estas bandas y grupos usan todo tipo de armas de fuego, desde sub-ametralladoras, a pistolas y fusiles automáticos, incluidos M1s, M14s, M16s, Galils y T65s.

Uno de los hechos más alarmantes es que muchas de las personas que viven en los barrios pobres de Puerto Príncipe dicen temer a la policía tanto como a los grupos armados. El 26 de octubre de 2004, trece jóvenes fueron supuestamente muertos a tiros por la policía a sangre fría en el barrio de Fort National, en Puerto Príncipe. En el transcurso de la investigación que llevó a cabo Amnistía Internacional, se descubrió que los homicidios tuvieron lugar cuando cuatro vehículos de la policía y una ambulancia llegaron por la tarde a Estime Street, en Fort National. Según informes, los ocupantes de los vehículos policiales llevaban uniformes negros con la palabra “Policía” inscrita en la parte posterior y el rostro cubierto con pasamontañas. Algunos se desplegaron en la calle en posición de combate, mientras otros se metieron por uno de los estrechos callejones típicos de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. Según las declaraciones de testigos, la policía entró en el domicilio de Ti Richard. Éste no se encontraba allí, pero en la casa había 13 personas a las que, según se informó, la policía obligó a tumbarse en el suelo. Después, los agentes dispararon contra ellas sin que mediara provocación alguna y sin ningún otro motivo aparente¹¹. La historia de una madre se expone más adelante.

Al día siguiente, en el barrio cercano de Carrefour Pean, cuatro hombres fueron presuntamente ejecutados a plena luz del día. Según testimonios recogidos por Amnistía Internacional en el lugar de los hechos, unos 15 agentes de la policía llegaron a la zona en cinco vehículos policiales alrededor de las once de la mañana. Los cuatro jóvenes fueron llevados al espacio que quedaba entre los vehículos y asesinados a tiros.¹² Los asesinatos suscitaron temores sobre la posible existencia de escuadrones de la muerte apoyados por el gobierno, que actuaban en los barrios pobres de Puerto Príncipe donde Aristide seguía contando con un fuerte respaldo popular.

La policía civil de NNUU anunció una investigación sobre las ejecuciones en Fort National, pero en noviembre de 2005, más de un año después, los resultados de las investigaciones no se habían hecho públicos. Las familias de las víctimas, como **Celita Poleus**, de 45 años, todavía esperan respuestas. Su hijo tenía 22 años y estaba en su último curso de instituto.

“Soy la madre de Vercius Fanfan- explica Celita-. Estaba vendiendo en el mercado cuando ocurrió la matanza, el 26 de octubre. La gente decía que había habido una masacre. Fui a casa, y cuando entré me di cuenta de que no estaba mi hijo. Le pregunté a su hermano mayor si le había visto volver del instituto. Me dijo que no. Entonces me puse a llorar, llorar, llorar”.

“Un vecino estaba en un tejado y pudo ver lo que ocurrió. Me explicó que la policía había matado a doce personas. Obligaron a Fanfan a cargar los cuerpos y a subirlos a los vehículos policiales. Cuando acabó, lo mataron. Le volaron toda la parte de atrás de la cabeza. Cuando su padre fue al Hospital General, encontró a Fanfan estirado boca arriba en la morgue. Cubrí la parte de atrás de su cabeza con una bolsa negra. Le enterramos el 11 de noviembre”.

Celia cree que su hijo fue asesinado por la policía, “porque iban vestidos como la policía”. Ahora se siente olvidada. “No se ha hecho justicia. El MINUSTAH nunca ha venido aquí a hablar conmigo. Desde que murió mi hijo, no les he visto ninguna vez”.

Al otro lado de Puerto Príncipe, en el barrio costero de Village de Dieu, bandas armadas aterrorizaron a la población a finales de 2004 y principios de 2005, asesinando y robando a los vecinos y violando a las mujeres. A finales de 2005, el barrio retomó un cierto grado de normalidad, pero las víctimas de la violencia, como **Marie**, de 27 años, todavía padecen las consecuencias.

“El 4 de enero de 2005, algunas personas vinieron a mi casa. Estaban buscando a mi marido y le ordenaron que abriese la puerta. Cuando vieron que no respondía, abrieron la puerta de una patada. Iban vestidos de negro y llevaban el rostro cubierto con máscaras. No sé si eran policías, ex militares, miembros de una banda... Llevaban armas muy grandes, Galils o M1s. No te lo puedo decir con exactitud porque no sé mucho de armas. Los hombres armados sacaron a mi marido de casa y le dispararon allí, delante de mí. Después volvieron y quemaron la casa”.

“Huí con mis hijos. Dormíamos en la entrada de otra casa. El mismo grupo volvió y me violaron. Tuve que dejar la zona y fui a Cité Plus (otro barrio pobre). Dormía en la entrada de otra casa. Un día, un grupo de hombres armados se acercó y me preguntó que qué hacía durmiendo allí. Nos patearon y después, tres de ellos nos violaron. Tuve que irme de allí y huí al barrio de Martissant en marzo de 2005. Una persona me permitió quedarme en su casa tres días. Pero

después, cuando se enteraron que había sido víctima de violación, me dijeron que no podía quedarme más allí porque podía contaminar la casa”.

Barrios destruidos

Además del impacto brutal de la violencia armada, una de las impresiones más llamativas que se desprende de las entrevistas es el sentimiento de que la gente no tiene a quién recurrir para estar protegido. “Cuando hay tiroteos no puedes salir a comprar comida”, explica Gerald, un vecino de Bel Air de 28 años. “La policía podría estar en un lado y los otros tipos en el otro. Cuando hay un tiroteo no sabes de dónde vienen los disparos. El ruido de los disparos es constante. Es para volverse loco”.

El 20 de agosto de 2005, en Martissant, una familia fue víctima de la violencia cometida tanto por la policía, como por una banda criminal. **Lucie**, de 46 años, siempre había vivido en esa zona. Ese día, Ulrick, su hijo de 28 años, había vuelto de ver un partido de fútbol. Se calcula que entre 4.000 y 6.000 personas habían asistido a ver los partidos de verano que tenían lugar en L’Eglise Ste. Bernadette/ l’Ecole Rose Mère, una iglesia y complejo escolar en Martissant. Los testigos declararon que policías y civiles armados con machetes entraron en el estadio, y que la policía disparó a varios individuos.¹³

“Cuando volvió a casa –explicó Marie-, me dijo que la policía había irrumpido en el estadio y había matado a mucha gente. Ulrick se había hecho una herida en el pie al escalar un muro del estadio cuando intentaba escapar”.

“Mientras me explicaba esto, un grupo de hombres que llevaban grandes armas de fuego entró en el callejón en el que vivimos. Este grupo siempre lleva grandes armas de fuego. Se pasean con ellas atemorizando a todo el mundo. No sé si son M1, Qaddafi, M16... creo que tienen de todos los tipos. Este grupo no representa al Estado; no son de la policía, son criminales. Utilizan las pistolas para matar a la gente, para secuestrar, para robar”.

“Entraron en casa y se llevaron a Ulrick. Lo mataron delante de mí, justo en frente de la puerta de casa. Más tarde, los vecinos dijeron que le habían disparado 52 veces. Tenía heridas de bala por todo su cuerpo. Cuando acabaron de dispararle, yo gritaba. Me dispararon a la cabeza, pero fallaron. Uno de ellos me llevó a una esquina del callejón y me violó allí, porque estaba protestando”.

Muchas de las mujeres que son violadas en Puerto Príncipe son violadas a punta de pistola. Malya, otra mujer del mismo barrio de Martissant, comentó “Ésa es la razón por la que hay más violaciones. Porque los hombres van armados. Si no fueran armados te podrías

resistir y pedir ayuda. Pero si van armados no hay nadie que te pueda ayudar”.

El número de muertes que causa la violencia armada es de por sí suficientemente espantoso. Entre septiembre de 2003 y diciembre de 2004, en Haití hubo por lo menos 700 víctimas de homicidios intencionados ocasionados con armas de fuego,¹⁴ y un número cuatro veces mayor de heridos de bala. Sin embargo, tal y como demuestran estas entrevistas, el impacto de la violencia armada es mucho mayor debido a, por ejemplo, el temor que la presencia de las armas de fuego infunde a la gente. La violencia armada destruye casas y medios de sustento. El miedo es endémico. Un informe de NNUU de 2004 descubrió que el 60 por ciento de los haitianos que viven en ciudades tienen miedo dentro de sus propias casas. Shumann, un abogado de Bel Air, lo resume así: “El impacto de la violencia ha significado la miseria para personas de todo el barrio: pobreza, desempleo, hambre. Los vendedores de la calle se levantan a las cuatro de la mañana para bajar a vender al centro. Llevan dinero, pero hay personas esperándoles a la salida del barrio para robarles. Cuando esto ocurre, ni ellos ni sus familias, sus hijos y sus vecinos, comerán ese día”.

Muchos jóvenes se ven afectados por la violencia causada por las armas de fuego. Según la representante de UNICEF, Françoise Gruloos-Ackermans, “Los niños y niñas de Haití sufrirán los peores efectos de la violencia debido a su vulnerabilidad extrema”.¹⁵ La mayoría de las 700 personas que fueron asesinadas durante el periodo mencionado con anterioridad, eran menores de 30 años. Un estudio realizado a nivel nacional por UNICEF en marzo de 2005, reveló que varios niños fueron presuntamente asesinados en más del 15 por ciento de las zonas analizadas en el estudio. En más de una tercera parte de las zonas estudiadas, varios niños fueron heridos de bala o fueron víctimas de palizas por parte de bandas armadas.¹⁶ Asimismo, los niños de la calle también están muy expuestos a la violencia política y al conflicto armado. Se calcula que en Puerto Príncipe viven 3.000 niños en la calle que son gravemente discriminados por la población. Con mucha frecuencia, ellos son el blanco de los grupos de vigilancia.¹⁷

Sin embargo, por muy trágico que parezca, los jóvenes de Haití suelen ser, además de las víctimas, los principales autores de la violencia armada. Según Andras Branstatter, asesor de protección infantil en la misión de Naciones Unidas, muchos niños menores de 18 años son reclutados por grupos armados.¹⁸ A principios de 2005, hasta 600 niños pertenecían a dos de los principales grupos armados del barrio de Cité Soleil.

“Sólo imagínate el efecto psicológico que tiene la violencia, no sólo en los adultos, sino sobre todo en los niños que han tenido que ver este tipo de cosas -explica el abogado Shumann, y añade- Hay tantos

niños que han sido víctimas, que han sido disparados, que han sido asesinados.”

Más allá de Puerto Príncipe

Mientras que, más allá de Puerto Príncipe, la gran parte de Haití ha vivido en relativa calma, las personas que viven cerca de la frontera con la República Dominicana sufrieron episodios de intensa violencia en 2005. Grupos locales de derechos humanos la atribuyen a bandas armadas involucradas en el tráfico de armas, drogas, vehículos, madera y otros productos comerciales a través de la frontera.

En los meses recientes, los vecinos han informado de frecuentes tiroteos que tienen lugar por la noche, muchas veces relacionados con el robo de ganado. Marie Michèle Polynice, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Fonds Parisien (una organización local haitiana con sede en la ciudad del mismo nombre), dijo haber documentado cinco muertes por disparo de bala en los pasados dos años. A finales de 2005, una joven murió al ser disparada de cerca con una pistola de 9mm en las proximidades de Terre Froide. Los asesinatos han traumatizado a las personas que viven en esta área rural, antes tranquila y pacífica.

“La población tiene mucho miedo debido a la inseguridad y a la falta de policía en esta zona”, dice Jean Berno Mathieu, miembro del Comité de Defensa de Derechos Humanos de Terre Froide. “Por miedo a poner en peligro la vida de sus familias, la gente que vive aquí no ha querido hacer declaraciones sobre el impacto que han tenido las armas”

Los residentes y los activistas por los derechos humanos en la zona culpan principalmente a las bandas armadas de traficantes tanto haitianos como dominicanos. Se quejan de la ausencia casi total de autoridades estatales y de la policía a lo largo de la frontera.

“El Estado debe hacer algo para que esto no siga pasando en Fonds Parisien. No estamos acostumbrados a esta violencia”, dice Elicia Jean, una mujer de 40 años, madre de seis hijos, que recibió un disparo en el hombro en septiembre de 2005. “La única forma de mejorar la situación es que el estado investigue, localice y confisque las armas que están en circulación”

2 ¿De dónde procedían las armas?

Se calcula que existe hasta 210.000 armas pequeñas y ligeras en circulación, la mayoría de ellas de posesión ilegal, y principalmente en manos de civiles y distintos grupos armados.¹⁹ En la actualidad, ni tan siquiera existe un registro de armas sobre la tenencia de armas legales.

Haití no produce armas de fuego, a excepción de las rudimentarias armas caseras *creole* (criollas). Todos los distintos grupos armados dependen del suministro exterior. El tráfico encubierto e ilegal de armas es corriente, y existen trilladas rutas de contrabando desde Florida (donde las armas de fuego son fáciles de conseguir), y transferencias recientes de armas automáticas procedentes de la República Dominicana, Jamaica, Centroamérica, Brasil, Sudáfrica e Israel. Según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, entre 2003 y 2005, una cuarta parte de las armas que se sacaron clandestinamente de Miami, Pompano Beach y Fort Lauderdale, en Florida, fueron destinadas a Haití. Debido a que entre el ocho y el diez por ciento de la cocaína colombiana que entra a Estados Unidos lo hace a través de Haití, no es de extrañar que exista la demanda y el dinero para comprar esas armas.²⁰ La policía y los guardacostas de Haití carecen de medios y de personal suficiente para controlar sus porosas fronteras y su larga línea de costa. También conviene recordar que antes de que estallara el conflicto en febrero de 2004, la policía de Haití estaba dotada de aproximadamente 5.000 agentes, en un país de 8,5 millones de habitantes. Por poner un ejemplo, el Departamento de Policía de Nueva York está dotado de 39.110 agentes (según datos del año fiscal 2003) para una población más o menos igual.²¹

Según el informe de Small Arms Survey publicado en octubre de 2005, “la entrada en Haití de grandes cargamentos legales o ilegales, pronto viene acompañada de brotes de violencia armada”.

EEUU ha sido el principal proveedor de armas legales e ilegales a Haití desde 1980. Desde 2004, bajo la administración del primer ministro Latortue, EEUU ha hecho muchas excepciones al embargo de 14 años sobre la transferencia de armas a Haití, incluyendo el suministro de 2.600 armas a la Policía Nacional en 2004, y aprobando, en 2005, una venta adicional de pistolas, fusiles y gases lacrimógenos por valor de 1,9 millones de dólares. El embargo impuesto en 1991 permite estas excepciones tras el análisis, caso por caso, de las transferencias.

EEUU y Naciones Unidas reclaman que la distribución y posesión de estas armas esté estrictamente controlada. Sin embargo, algunos observadores han mostrado su preocupación por dos razones: en primer lugar, porque la propia policía haitiana ha sido acusada repetidamente de ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Algunos de los informes recogidos en este documento parecen confirmar esta preocupación.

En segundo lugar, porque en el pasado, las armas de fuego en poder de la policía han acabado en manos de individuos y grupos armados ilegales. Según Small Arms Survey, “las armas en poder de grupos armados parecen proceder de arsenales y existencias ‘oficiales’, antes que ser producto de una compra ilegal exterior. Las armas de fuego

son canalizadas con frecuencia desde los arsenales de la policía por personas corruptas 'de dentro', y luego transferidas a Organizaciones Populares simpatizantes (organizaciones de base vinculadas a políticos de distinto signo), milicias y bandas criminales que operan en los centros urbanos. Por ejemplo, según ex guardias de palacio, el ex Presidente Aristide suministró por lo menos 4.000 armas (una combinación de fusiles de asalto, pistolas y revólveres) a los *chimères* en los días que precedieron a su derrocamiento a principios de 2004. Entre ellas había armas supuestamente procedentes de Sudáfrica".²²

En resumen, existe un peligro real de que las armas suministradas a la policía haitiana sean usadas para cometer abusos por agentes de la propia policía o canalizadas hacia otros grupos armados.

Más allá de estas transferencias, reconocidas por EEUU, existe una factura recibida por oficiales haitianos de alto rango en noviembre de 2004, un asunto que está rodeado de misterio. En esta factura se detalla una cantidad mucho mayor de armas que las reconocidas oficialmente, entre las que hay 3.653 fusiles M14, 1.100 Mini Galils, varios miles de diferentes tipos de pistolas de calibre 0.38, 700 subfusiles MP5, y alrededor de un millón de diferentes cartuchos, todo ello valorado en 6,95 millones de dólares. Quizás lo más intrigante de la cuestión es que el Inspector Jefe de la Policía reclamó en esas fechas necesitar el suministro de tan sólo 300 rifles de combate M14. En abril y mayo de 2005, tanto la Embajada de EEUU en Puerto Príncipe como el Departamento de Estado de EEUU en Washington negaron que se hubieran transferido estas armas.²³

Además, a lo largo de la última década, varios países han exportado armas legalmente a Haití. Durante diez años, hasta el año 2001, Brasil autorizó la exportación de fusiles para cazar (pese a que la caza no es un deporte nada extendido en Haití) por valor de más de 392.000 dólares; a lo largo de 2003 hubo más transferencias de este tipo. Entre 1993 y 1998, el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Suiza autorizaron la transferencia de pistolas y revólveres, munición, granadas y minas antipersona por valor de más de 26.000 dólares.²⁴ Según los datos de aduanas recogidos en la base de datos de comercio de mercancías de Naciones Unidas (la Comtrade), las transferencias holandesas de 1998 aparecían bajo la categoría de Naciones Unidas de "bombas, granadas, munición, minas y otros".²⁵

3 ¿Qué se debe hacer?

No existe una solución única para la proliferación de armas en Haití y sería engañoso pensar que va a ser una tarea fácil. En febrero de 2004, el gobierno provisional estableció la Comisión Nacional de Desarme formada por representantes de la sociedad civil y del gobierno. Sin embargo, a la fecha de redactar este documento en diciembre de 2005, la aplicación de un programa integral de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de grupos armados y personal armado en Haití sigue pendiente.

Por lo pronto, el gobierno provisional ha aplicado unas normas a las fuerzas desmovilizadas y otras a las bandas armadas. Según informes, el gobierno ofreció un total de aproximadamente 30 millones de dólares de compensación económica a miembros de las ex Fuerzas Armadas de Haití, sin que esta compensación estuviera condicionada a la entrega de las armas ni a la desmovilización. La reintegración significa tan sólo la “integración” a la Policía Nacional, ya que no parece haberse establecido ningún programa para proporcionar formación y garantizar la profesionalización de los militares desmovilizados. Durante un acto oficial de “desarme y desmovilización” que tuvo lugar en Cap Haitian, un grupo de 309 ex soldados desmovilizados hicieron entrega simbólica de sus armas: apenas entregaron siete armas viejas y en mal estado; se quedaron con las armas automáticas.

“Las cosas no están saliendo como esperábamos”, dijo Alix Richard, Presidente de la Comisión Nacional de Desarme del gobierno y asesor de Latortue. “Lo que podemos ofrecer no es precisamente atractivo. Si alguien quiere entregarse a la justicia, podemos ofrecerle asistencia jurídica y pedir a los observadores de los derechos humanos que garanticen que no son víctimas de malos tratos. Pero nadie va a entregar su arma a cambio de una simple promesa de asistencia legal”.

La impunidad de la que goza la policía hace necesario que el gobierno provisional de Haití tome medidas de forma inmediata para evitar las ejecuciones extrajudiciales, investigar los abusos contra los derechos humanos y procesar a los responsables de dichos abusos.²⁶

El programa de DDR elaborado conjuntamente por el gobierno y Naciones Unidas, ha cambiado su centro su atención. Las esperanzas están puestas ahora en que los proyectos y los puestos de trabajo que cree el programa calmarán las tensiones y ofrecerán una motivación para abandonar la violencia armada. Sin embargo, es importante que estos proyectos sean sostenibles y puedan continuar aplicándose cuando la misión de Naciones Unidas abandone el país, con el fin de que la violencia armada no vuelva a aumentar en un futuro.

Por otro lado, la experiencia de un proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP, en sus siglas en inglés) que se llevó a cabo en Carrefour-Feuilles (al suroeste de Puerto Príncipe) durante el mandato del ex presidente Aristide, resultó ser muy útil para evaluar la respuesta de las comunidades afectadas. En el marco de este proyecto se establecieron contactos con la comunidad con el fin de crear un clima de confianza, y se consiguió que los miembros de la comunidad entregaran voluntariamente sus armas a cambio de tener acceso a programas de micro-créditos.²⁷

Según Desmond Molloy, jefe del programa de DDR de Naciones Unidas en Haití, “La situación de Haití es única. Hemos intentado implementar el programa de DDR sin el espacio político adecuado, con un gobierno provisional que ha fomentado aún más la polarización política, en vez de buscar la unidad nacional. La violencia y el miedo han aumentado, lo que significa que la gente está más dispuesta a esconder las armas que posee, que a entregarlas”

Tradicionalmente, el programa de DDR ha sido aplicado tras una guerra o conflicto armado en el que existen dos bandos claramente definidos, y tras un acuerdo de paz que establece los términos para el desarme. Sin embargo, en Haití existen un sinnúmero de pequeños grupos armados con alianzas inciertas y cambiantes.

Desde luego, es cierto que muchas personas no entregarán sus armas si no ven oportunidades de trabajo que les permitan salir de la pobreza sin necesidad de recurrir a la violencia. En muchas partes de Puerto Príncipe, es muy difícil percibir indicios de esas oportunidades. “La solución a la violencia en Bel Air tiene que ver con la miseria, -dice Herby, un vecino de 24 años-. “La miseria corrompe a cualquiera. Los jóvenes tienen que poder ir al colegio. Tiene que haber asistencia médica. Tiene que existir la manera de poder comer por lo menos dos veces al día. Tiene que existir la manera de poder ganar por lo menos dos dólares diarios. Esto ayudaría a acabar con la violencia”.

Sin embargo, incluso las personas que trabajan en proyectos para reducir la violencia dicen que esa no es, tampoco, la única respuesta. Philippe Branchat es un representante de la Organización Internacional para las Migraciones, que gestiona proyectos financiados por la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional dirigidos a las comunidades, con el objetivo de reducir la violencia en barrios pobres. Branchat dice que “lo que más necesita Haití es justicia”. La justicia es, sin duda alguna, una prioridad. En la actualidad, en Haití predomina la impunidad frente a los abusos presentes y pasados cometidos contra los derechos humanos, por ejemplo, por parte de funcionarios del estado y agentes de la policía. Existe un desprecio por el Estado de Derecho, y también por un proceso judicial adecuado para los prisioneros, muchos de los cuales siguen estando en prisión sin haber sido declarados culpables.

Según Small Armas Survey, “Existe la necesidad imperiosa de detener y reducir la proliferación de armas, que debe ir acompañada de medidas para regular el suministro de armas estatales y no estatales, y del desarme definitivo de la población civil”. Para ello será necesario hacer cambios en el Código Penal de Haití, ya que su constitución estipula que “Todo ciudadano tiene derecho a la autodefensa armada dentro de los límites de su domicilio, pero no tiene el derecho a portar armas sin la autorización expresa y justificada del Jefe de Policía.”

En relación a la policía, el uso que los agentes hacen de la fuerza y de las armas de fuego debería estar controlado por principios acordados internacionalmente, incluyendo el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los más evidentes Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de NNUU. Desgraciadamente, estos principios no fueron ratificados en el Programa de Acción de NNUU sobre Armas Pequeñas y Ligeras, y su incumplimiento está bastante extendido entre los Estados.²⁸ Las normas reconocen el hecho obvio de que la policía puede tener que recurrir, en algunos casos, a la fuerza para protegerse a ellos mismos o a terceros de una amenaza de muerte inminente o de ser gravemente heridos. Pero el uso de la fuerza debe ser necesario y proporcional a la violencia a la que se enfrentan. Debe ser legítima, no arbitraria. En Haití, así como en otros lugares, aquellos que suministran las armas tienen la responsabilidad de garantizar que estas normas se cumplen. Es imprescindible llevar a cabo una investigación adecuada de los agentes que forman la policía en la actualidad, y de los ex miembros de las fuerzas armadas que se están integrando a este cuerpo; y también es necesario implementar una reestructuración y reforma de la policía. En caso contrario, continuará existiendo el peligro de que las armas que se suministren a la policía no sean utilizadas como se pensaba.

En resumen, hay mucho que hacer en Haití. Sin embargo, el suministro continuado de armas desde el exterior (tanto ilegal, procedente de República Dominicana, Jamaica, Centroamérica, Brasil, Sudáfrica e Israel; como legal e ilegal, procedente de EEUU) amenaza con seguir alimentando la violencia desde fuera, al tiempo que también amenaza a aquéllos que dentro de Haití luchan por controlarlas.

El contrabando ilegal de armas debe ser detenido. Los embargos no deben ser violados. Al igual que en las demás crisis violentas, el resto del mundo debe asumir su responsabilidad por el suministro de armas. El comercio internacional de armas carece de controles efectivos. La transferencia irresponsable de armas contribuye a que se cometan violaciones de los derechos humanos y actúa como catalizador de los conflictos, prolongando las guerras una vez que

han estallado, aumentando su mortalidad y agravando su inmenso coste humano.

La principal responsabilidad de controlar el flujo de armas descansa en los gobiernos -en *todos* los gobiernos, sean o no fabricantes-, que exportan, reexportan, importan o por los que transitan armas. Los Estados tienen el derecho de adquirir armas para su legítima defensa y para hacer cumplir la ley de manera responsable; sin embargo, no deberían autorizar la transferencia de armas a lugares en los que las armas van a ser utilizadas, o es probable que sean utilizadas, para cometer violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, o para obstaculizar el desarrollo.

A pesar del sufrimiento y de la pobreza que provoca la transferencia internacional de armas, sigue sin existir un tratado exhaustivo y vinculante que controle y regule el comercio de armas convencionales. El actual sistema de controles sobre las transferencias de armas está plagado de lagunas y de incoherencias que son aprovechadas, por ejemplo, por traficantes y comerciantes.

Un nuevo Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA), basado en los principios fundamentales del derecho internacional, establecería unos principios básicos comunes para las transferencias de armas. De esta manera, se evitarían aquellas transferencias en las que exista la posibilidad de que las armas sean utilizadas para la violación de derechos humanos o para obstaculizar el desarrollo. El TCA reduciría el coste humano vinculado a la transferencia irresponsable de armas y evitaría que los comerciantes de armas sin escrúpulos se aprovecharan del punto más débil de la cadena de suministro.

El número de gobiernos que apoyan los principios en los que se basa el TCA sigue creciendo.

El año 2006 ofrece una oportunidad política única para poner en marcha este Tratado:

- La Conferencia de Revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras, que se celebra en junio y julio de 2006, debe acordar unos principios claros para la transferencia internacional de estas armas, basados en las normas internacionales existentes, con el fin de evitar que éstas caigan en manos equivocadas.
- El Comité Preparatorio de la Conferencia, que se celebra este mes de enero en Nueva York, debe preparar la agenda y los debates sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
- El Primer Comité de la Asamblea General de NNUU, que se reúne en octubre de 2006, debe, por último, iniciar el proceso de negociación del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La proliferación de armas convencionales es un hecho demasiado grave que no puede seguir siendo ignorado. La transferencia de armas sigue contribuyendo a que se cometan atrocidades en Haití y en muchos otros países. Los exportadores de armas responsables y los Estados directamente afectados por el descontrol en el comercio de armas no deben ser refrenados por los pocos países que quieren entorpecer el avance de las negociaciones. En 2006, deben empezar las negociaciones para acordar un Tratado sobre el Comercio de Armas.

Notas

¹ La MINUSTAH se desplegó en Haití en junio de 2004. Entre otras cosas, fueron encargados de apoyar al gobierno provisional para garantizar la seguridad y la estabilidad; ayudar al gobierno a reformar la Policía Nacional haitiana; y proteger y promover los derechos humanos y el estado de derecho (Consejo de Seguridad de NNUU, resolución 1542, 30 de abril de 2004).

² Los incidentes concretos que se describen en este documento, están basados en las entrevistas que tuvieron lugar en Haití en noviembre de 2005 y en los artículos que se mencionan a continuación, basados en entrevistas con grupos haitianos de defensa de los derechos humanos realizadas durante 2005: "Civilians caught in UN-gang crossfire", de Reed Lindsay, *The Toronto Star*, 1 de mayo de 2005; y "OAS urged to rein in police, peacekeepers", de Jim Lobe, *Inter-Press Service*, 16 de noviembre de 2005.

³ "Securing Haiti's Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects for Disarmament, Demobilisation, and Reintegration", Robert Muggah, *Small Arms Survey*, Graduate Institute of International Studies, Ginebra, octubre de 2005, pág. 12.

⁴ Presuntamente, también estaba vinculado políticamente al antiguo partido de oposición a Lavalas y al actual gobierno. "Desarme retrasado, justicia denegada", *Amnistía Internacional*, julio de 2005, AI Index AMR 36/005/2005.

⁵ "Haití: las fuerzas de NNUU matan a cuatro personas y arrestan a 33 en una nueva operación contra las bandas en la capital", *UN News Centre*, 16 de noviembre de 2005.

⁶ Sin embargo, también hubo secuestros por motivos políticos, como el caso de Jean Roche, que fue secuestrado, torturado y ejecutado.

⁷ El promedio de dos secuestros diarios fue denunciado por fuerzas de NNUU brasileñas a Mark Schneider, miembro del Grupo Internacional de Crisis: "Política a punta de pistola", *Los Angeles Times*, 29 de noviembre de 2005.

⁸ "La CIDH deplora la intensificación de la violencia en Haití", *Organización de los Estados Americanos*, 23 de junio de 2005.

⁹ Las ejecuciones extrajudiciales siguen teniendo lugar, a pesar de que son negadas por la policía de forma rutinaria. *Amnistía Internacional* ha

planteado a las autoridades varios casos en los que la organización cree que es posible que se haya hecho un uso excesivo de la fuerza durante operaciones destinadas a hacer cumplir la ley. Entre estos casos se incluyen los siguientes: el 4 de febrero de 2005, Jeff Joseph, un niño de 14 años, fue asesinado, presuntamente en manos de agentes de la policía, cuando se dirigía a un comercio de la calle San Fi, en Bel-Air; .el 28 de febrero, agentes de policía abrieron fuego contra una manifestación pacífica de partidarios de la Familia Lavalas en Bel Air, causando la muerte de al menos una persona. Véase “Haití: Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional.

¹⁰ Nos referimos a la Guardia Presidencial (y también a muchos agentes de la policía) que fueron despedidos en un proceso que no estuvo adecuadamente controlado. Así, muchos de ellos se quedaron con sus uniformes y armas, lo cual les permite seguir actuando en calidad de sus antiguos puestos.

¹¹ “Haití. Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional, *op. cit.*

¹² “Haití. Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional, *op. cit.*

¹³ www.ijdh.org/articles/article_recent_news_8-24-05.htm

¹⁴ Robert Muggah (noviembre de 2005) “Securing Haiti’s Transition: Reviewing Human Insecurity and the Prospects for Disarmament, Demobilization, and Reintegration”, pág. xxii , Occasional Paper No.14, Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Ginebra.

¹⁵ Entrevista llevada a cabo por un investigador de la campaña Armas Bajo Control en Puerto Príncipe, noviembre de 2005.

¹⁶ “Los niños más desamparados son los más afectados por la crisis de Haití” UNICEF, Comunicado de Prensa, 19 de abril de 2005, http://www.unicef.org/media/media_20443.html

¹⁷ “Haití. Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional, *op. cit.*

¹⁸ Entrevista llevada a cabo por un investigador de la campaña Armas Bajo Control en Puerto Príncipe, noviembre de 2005.

¹⁹ Robert Muggah, *op.cit.*, pág. xxiv.

²⁰ Robert Muggah, *op.cit.*, pág. 15.

²¹ “Haití. Romper el ciclo de la violencia: ¿última oportunidad para Haití?”, Amnistía Internacional, junio de 2004, AI Index: AMR 36/038/2004. Véase también www.ci.nyc.ny.us/html/nypd/html/misc/pdfaq2.html

²² Robert Muggah, *op.cit.*, pág.16.

²³ Robert Muggah, *op.cit.*, pág. 12. El autor obtuvo esta información de informadores muy bien situados en Puerto Príncipe, en noviembre de 2004, que dijeron que las armas ya habían sido transferidas a Haití a través de un intermediario que operaba desde EEUU. Véase también “Indignación por armas de fuego de EEUU para la policía haitiana”, South Florida Sun Sentinel, 23 de abril de 2005.

²⁴ Robert Muggah, *op.cit.*, pág. 12.

²⁵ “Haití: Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional, *op. cit.*

²⁶ Véase “Haití: Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional, *op. cit.*, para más información sobre las medidas necesarias para promover estos cambios positivos y efectivos en Haití.

²⁷ “Haití: Desarme retrasado, justicia denegada”, Amnistía Internacional, *op. cit.*

²⁸ Para una revisión de estos principios y del fracaso de los estados en implementarlos, véase: Brian Wood y Glenn MacDonald, “Critical Triggers: Implementing International Standards for Police Firearms Use”, Small Arms Survey, Oxford University Press, 2004.

© Amnistía Internacional, la Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras y Oxfam Internacional, enero de 2006.

Este documento está basado en las entrevistas llevadas a cabo en Haití en noviembre de 2005. El texto puede ser utilizado libremente en campañas, así como en el ámbito educativo y de la investigación, siempre que se indique la fuente de forma completa.

Se pueden descargar copias del documento en www.controlarms.org y en www.armasbajocontrol.org

AI Index number AMR 36/001/2006.



Amnistía Internacional es un movimiento independiente, integrado por activistas voluntarios de todo el mundo, que trabajan a favor de los derechos humanos. Cuenta con más de un millón y medio de miembros, seguidores y suscriptores en más de 150 países y territorios. Tiene delegaciones nacionales en 54 países y en todas las regiones del mundo.

Email: info@amnesty.org.uk



La Red Internacional de Acción contra las Armas Ligeras es un el movimiento mundial contra la violencia armada. Está formada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en 100 países para detener la proliferación y el uso indebido de las armas ligeras mediante campañas activas, promoviendo el desarrollo de redes regionales y temáticas, apoyando iniciativas y sensibilizando a la opinión pública.

Email: contact@iansa.org



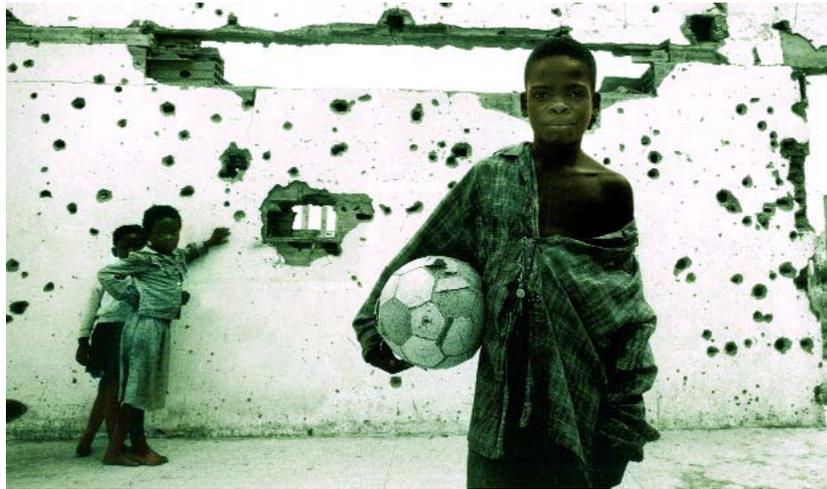
Oxfam

Oxfam Internacional es una confederación de 12 agencias dedicadas al desarrollo que trabajan en 120 países en vías de desarrollo: Oxfam América, Oxfam Bélgica, Oxfam Canadá, Oxfam Australia, Oxfam Alemania, Oxfam Gran Bretaña, Oxfam Hong Kong, Intermón Oxfam (España), Oxfam Irlanda, Novib Oxfam Países Bajos, Oxfam Nueva Zelanda y Oxfam Québec.

Email: advocacy@oxfaminternational.org

Por un control estricto de las armas

Voces de Haití



Las armas están fuera de control

Cada año, las armas matan como promedio a más de medio millón de hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Miles de personas más quedan mutiladas, son torturadas y se ven forzadas a huir de sus hogares. La proliferación incontrolada de armas intensifica los conflictos, agrava la pobreza e incentiva las violaciones de los derechos humanos. La comunidad internacional debe actuar de manera inmediata.

Para hacer frente a esta crisis, Oxfam, Amnistía Internacional y la Red de Acción Internacional contra las Armas Ligeras (IANSA) han lanzado conjuntamente una campaña internacional con el objetivo de lograr una regulación eficaz del comercio de armas que mejore de modo sustancial la seguridad de las personas ante la amenaza de la violencia armada.

Tú puedes ayudarnos a acabar con este tremendo abuso.

Visita la web de armas bajo control y participa en la petición visual más grande y efectiva del mundo.

www.controlarms.org/
www.armasbajocontrol.org

armas bajo **control**

